



Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio

DECRETO LEY N° 25475

(*) De conformidad con el Artículo Único de la Ley N° 26671, publicada el 12-10-96, el cual dispone que a partir del 15 de octubre de 1997 el juzgamiento de los delitos de terrorismo, previsto en el presente Decreto Ley y el procedimiento recursal seguido ante los órganos jurisdiccionales pertinentes, se realizarán por los magistrados que corresponden conforme a las normas procesales y orgánicas vigentes y a lo dispuesto en la presente ley. Los magistrados serán debidamente designados e identificados por el sistema de turnos, el que será determinado en su caso por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial y la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público.

CONCORDANCIAS: R. N° 009-2001-CT-PJ, Art. 2
R. N° 398-92-MP-FN
L. N° 26447
R.Adm. N° 510-CME-PJ
R.Adm. N° 596-CME-PJ
L. N° 27379, Art. 1, num. 3
R.Defensorial N° 07-DP-2001

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

El Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Ha dado el Decreto Ley siguiente:

Artículo 1.- Contenido del dispositivo.

El presente Decreto Ley establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación policial, la Instrucción y el Juicio, así como las medidas de protección que la Sociedad está obligada a proporcionar a los Magistrados, miembros del Ministerio Público y Auxiliares de Justicia que intervengan en dichos procesos.

CONCORDANCIAS: D.L. N° 25418, Art. 2
D.L. N° 25475, Arts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13
D.S. N° 035-93-JUS, Art. 6

Artículo 2.- Descripción típica del delito.

El que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad



y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y del Estado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años. (*)

CONCORDANCIAS: D.L. N° 25418, Art. 2
D.L. N° 25475, Arts. 1, 4, 5, 6 y 12
D.L. N° 25499, Art. 1
D.L. N° 25564; Art. 3
D.L. N° 25659, Art. 1
D.L. N° 25744, Art. 1
D.S. N° 015-93-JUS, Arts. 1 y 4
D.LEG. N° 922

(*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 921, publicado el 18-01-2003, la pena temporal máxima para los delitos previstos en el presente artículo, será cinco años mayor a la pena mínima establecida en el mismo.

Artículo 3.- Penas aplicables.

La pena será:

a. Cadena Perpetua:

- Si el agente pertenece al grupo dirigencial de una organización terrorista sea en calidad de líder, cabecilla, jefe, secretario general u otro equivalente, a nivel nacional, sin distinción de la función que desempeñe en la organización.

- Si el agente es integrante de grupos armados, bandas, pelotones, grupos de aniquilamiento o similares, de una organización terrorista, encargados de la eliminación física de personas o grupos de personas indefensas sea cual fuere el medio empleado.

b. Privativa de Libertad no menor de treinta años:

- Si el agente es miembro de una organización terrorista que, para lograr sus fines, cualesquiera que sean, utiliza como medio el delito de terrorismo previsto en el Artículo 2 de este Decreto Ley.

Igual pena será aplicada al delincuente terrorista que directamente intervenga o provoque la muerte de personas o tenga participación en tales acciones.

- Si el daño ocasionado a los bienes públicos y privados impide, total o parcialmente, la prestación de servicios(*)NOTA DE EDITOR esenciales para la población. (*)



(*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 921, publicado el 18-01-2003, la pena temporal máxima para los delitos previstos en el presente inciso, será cinco años mayor a la pena mínima establecida en el mismo.

c. Privativa de Libertad no menor de veinticinco años:

- Si el agente miembro de una organización terrorista se vale de extorsión, asalto, robo, secuestro de personas, o se apropia por cualquier medio ilícito de dinero, bienes o servicios de una autoridad o de particulares.

- Si el agente hace participar a menores de edad en la comisión de delitos de terrorismo.

- Si como efecto de los hechos contenidos en el Artículo 2 de este Decreto Ley, se producen lesiones graves a terceras personas. (*)

CONCORDANCIAS: L. N° 26220, Art. 2
L. N° 26223, Arts. 1, 2 y 3
D.L. N° 25418, Art. 2
D.L. N° 25428, Art. 1
D.L. N° 25475, Arts. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 21
D.L. N° 25499, Art. 1
D.L. N° 24659, Arts. 2 y 3
D.L. N° 25564; Art. 2 y 4
D.L. N° 25916, Art. 1
D.L. N° 25880, Art. 1
D.S. N° 015-93-JUS, Arts. 1 y 4
D.S. N° 035-93-JUS, Art. 6

(*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 921, publicado el 18-01-2003, la pena temporal máxima para los delitos previstos en el presente inciso, será cinco años mayor a la pena mínima establecida en el mismo.

Artículo 4.- Colaboración con el terrorismo

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años, el que de manera voluntaria obtiene, recaba, reúne o facilita cualquier tipo de bienes o medios o realiza actos de colaboración de cualquier modo favoreciendo la comisión de delitos comprendidos en este Decreto Ley o la realización de los fines de un grupo terrorista.

Son actos de colaboración:

a. Suministrar documentos e informaciones sobre personas y patrimonios, instalaciones, edificios públicos y privados y cualquier otro que específicamente coadyuve o facilite las actividades de elementos o grupos terroristas.



b. La cesión o utilización de cualquier tipo de alojamiento o de otros medios susceptibles de ser destinados a ocultar personas o servir de depósito para armas, explosivos, propaganda, víveres, medicamentos, y de otras pertenencias relacionadas con los grupos terroristas o con sus víctimas.

c. El traslado a sabiendas de personas pertenecientes a grupos terroristas o vinculadas con sus actividades delictuosas, así como la prestación de cualquier tipo de ayuda que favorezca la fuga de aquellos.

d. La organización de cursos o conducción de centros de adoctrinamiento e instrucción de grupos terroristas, que funcionen bajo cualquier cobertura.

e. La fabricación, adquisición, tenencia, sustracción, almacenamiento o suministro de armas, municiones, sustancias u objetos explosivos, asfixiantes, inflamables, tóxicos o cualquier otro que pudiera producir muerte o lesiones. Constituye circunstancia agravante la posesión, tenencia y ocultamiento de armas, municiones o explosivos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.

f. Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente con la finalidad de financiar las actividades de elementos o grupos terroristas.(*).

(*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 921, publicado el 18-01-2003, la pena temporal máxima para los delitos previstos en el presente artículo, será cinco años mayor a la pena mínima establecida en el mismo.

CONCORDANCIAS: L. N° 26223, Arts.1, 2 y 3
D.L. N° 25418, Art. 2
D.L. N° 25428, Art. 1
D.L. N° 25475, Arts. 1, 2, 3 y 21
D.L. N° 25499, Art. 1
D.L. N° 25880, Art. 1

Artículo 5.- Afiliación a organizaciones terroristas.

Los que forman parte de una organización terrorista, por el sólo hecho de pertenecer a ella, serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de veinte años e inhabilitación posterior por el término que se establezca en la sentencia. (*)

(*) De conformidad con el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 921, publicado el 18-01-2003, la pena temporal máxima para el delito previsto en el presente artículo, será cinco años mayor a la pena mínima establecida en el mismo.

CONCORDANCIAS: D.L. N° 25418, Art. 2
D.L. N° 25428, Art. 1
D.L. N° 25475, Arts. 1, 2, 3 y 21
D.L. N° 25499, Art. 1

Artículo 6.- Instigación.



Será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de doce años ni mayor de veinte, el que mediante cualquier medio incitare a que se cometa cualquiera de los actos que comprende el delito de terrorismo.

CONCORDANCIAS: L. N° 26223, Arts.1, 2 y 3
D.L. N° 25418, Art. 2
D.L. N° 25428, Art. 1
D.L. N° 25475, Arts. 1, 2, 3 y 21
D.L. N° 25499, Art. 1
D.L. N° 25880, Art. 1

Artículo 7.- Apología.

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años, el que públicamente a través de cualquier medio hiciere la apología del terrorismo o de la persona que lo hubiere cometido. El ciudadano peruano que cometa este delito fuera del territorio de la República, además de la pena privativa de libertad, será sancionado con la pérdida de la nacionalidad peruana. (*)

CONCORDANCIAS: L. N° 26223, Arts.1, 2 y 3
D.L. N° 25418, Art. 2
D.L. N° 25428, Art. 1
D.L. N° 25475, Art. 1, 3 y 21
D.L. N° 25499, Art. 1
D.L. N° 25880, Art. 1

(*) Artículo declarado inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 010-2002-AI-TC LIMA, publicado el 04-01-2003.

Artículo 8.- Obstaculización de acción de la justicia.

El que por cualquier medio obstruya, dificulte o impida la acción de la justicia o las investigaciones en curso sobre delito de terrorismo, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.

CONCORDANCIAS: D.L. N° 25418, Art. 2
D.L. N° 25428, Art. 1
D.L. N° 25475, Arts. 1, 3 y 21
D.L. N° 25499, Art. 1

Artículo 9.- Reincidencia.

Los reincidentes, serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de treinta años. Para efectos del presente Decreto Ley contra el terrorismo, se considera reincidente al delincuente que habiendo sufrido pena privativa de libertad, impuesta por sentencia nacional o extranjera, incurra en la comisión de un nuevo delito antes de transcurrir diez años de la condena precedente. (*)

CONCORDANCIAS: L. N° 26223, Arts.1, 2 y 3
D.L. N° 25418, Art. 2



D.L. N° 25428, Art. 1
D.L. N° 25475, Art. 1, 3 y 21
D.L. N° 25499, Arts. 1 y 4

(*) De conformidad con el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 921, publicado el 18-01-2003, la pena máxima establecida para la reincidencia contemplada en el presente artículo será de cadena perpetua.

Artículo 10.- Prohibición de reducción de pena.

En los casos de delitos de terrorismo, los Magistrados no podrán aplicar lo dispuesto por el Artículo 22 del Código Penal aprobado por Decreto Legislativo N° 635.

CONCORDANCIAS: D.L. N° 25418, Art. 2
D.L. N° 25428, Art. 1
D.L. N° 25475, Arts. 1, 3 y 21

Artículo 11.- Pena accesoria.

Toda condena dictada en aplicación del presente Decreto Ley, llevará consigo la pena accesoria de multa de sesenta a trescientos sesenticinco días-multa.

CONCORDANCIAS: D.L. N° 25418, Art. 2
D.L. N° 25428, Art. 1
D.L. N° 25475, Art. 1, 3 y 21

Artículo 12.- Normas para la investigación.

En la investigación de los delitos de terrorismo, la Policía Nacional del Perú observará estrictamente lo preceptuado en las normas legales sobre la materia y, específicamente, las siguientes:

a. Asumir la investigación policial de los delitos de terrorismo a nivel nacional, disponiendo que su personal intervenga sin ninguna restricción que estuviere prevista en sus reglamentos institucionales.

En los lugares que no exista dependencia de la Policía Nacional del Perú, la captura y detención de los implicados en estos delitos corresponderá a las Fuerzas Armadas, quienes los pondrán de inmediato a disposición de la dependencia policial más cercana para las investigaciones a que hubiere lugar.

b. Cautelar la defensa de la legalidad, el respeto a los derechos humanos y a los tratados y convenios internacionales. En tal sentido, durante esta etapa de la investigación se solicitará la presencia de un representante del Ministerio Público.

c. Efectuar la detención de presuntos implicados, por el término no mayor de quince días naturales, dando cuenta en el plazo de veinticuatro horas por escrito al Ministerio Público y al Juez Penal, correspondiente.



d. Cuando las circunstancias lo requieran y la complejidad de las investigaciones así lo exija, para el mejor esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación, podrá disponer la incomunicación absoluta de los detenidos hasta por el máximo de ley, con conocimiento del Ministerio Público y de la autoridad jurisdiccional respectiva. (*)

(*) Inciso declarado inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 010-2002-AI-TC LIMA, publicado el 04-01-2003.

e. Disponer, cuando fuere necesario, el traslado del o de los detenidos para el mejor esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación. Igual procedimiento se seguirá como medida de seguridad cuando el detenido evidencie peligrosidad. En ambos casos con conocimiento del Fiscal Provincial y del Juez Penal respectivo.

f. Los encausados tienen derecho a designar su abogado defensor, el mismo que sólo podrá intervenir a partir del momento en que el detenido rinda su manifestación en presencia del representante del Ministerio Público. Si no lo hicieren, la autoridad policial les asignará uno de oficio, que será proporcionado por el Ministerio de Justicia.

CONCORDANCIAS: D.L. N° 25475, Arts. 1, 2, 18 y Tercera, Cuarta y Séptima D.T.
D.L. N° 25659, Arts. 5, 6 y 7
D.L. N° 25660, Art. 1
D.L. N° 25744, Arts. 1 y 2
D.S. N° 015-93-JUS, Arts. 2 y 4
D.S. N° 035-93-JUS, Art. 6

Artículo 13.- Normas para la instrucción y el juicio.

Para la Instrucción y el Juicio de los delitos de terrorismo a que se refiere el presente Decreto Ley, se observarán las siguientes reglas:

a. Formalizada la denuncia por el Ministerio Público, los detenidos serán puestos a disposición del Juez Penal, quien dictará el Auto Apertorio de Instrucción con orden de detención, en el plazo de veinticuatro horas, adoptándose las necesarias medidas de seguridad. Durante la Instrucción no procede, sin excepción alguna, ningún tipo de libertad.

Asimismo, las cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones y cualquier otra articulación se resolverán en el principal con la sentencia. (*)

(*) Inciso modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 26248, publicada el 25-11-93, cuyo texto es el siguiente:

"a) Formalizada la denuncia por el Ministerio Público, los detenidos serán puestos a disposición del Juez Penal, quien distará el Auto Apertorio de Instrucción con orden de detención, en el plazo de veinticuatro horas, adoptándose las necesarias medidas de seguridad. Durante la instrucción no procede ningún tipo de libertad, con excepción de la Libertad Incondicional.



Si el Juez Penal, de oficio o a pedido del inculpado dicta Libertad Incondicional, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 201 del Código de Procedimientos Penales, la Resolución será elevada en consulta. La excarcelación no se producirá mientras no se absuelva la consulta".

b. La Instrucción concluirá en el término de treinta días naturales prorrogables por veinte días naturales adicionales, cuando por el número de inculpados o por no haberse podido actuar pruebas consideradas sustanciales por el Ministerio Público, fuera necesario hacerlo.

c. En la Instrucción y en el Juicio no se podrán ofrecer como testigos a quienes intervinieron por razón de sus funciones en la elaboración del Atestado Policial.

d. Concluida la Instrucción el expediente será elevado al Presidente de la Corte respectiva, el mismo que remitirá lo actuado al Fiscal Superior Decano; quien a su vez designará al Fiscal Superior que debe formular su acusación en el plazo de tres días, bajo responsabilidad.

e. Devueltos los autos con el Dictamen Acusatorio, el Presidente de la Corte Superior procederá a designar a los integrantes de la Sala Especializada para el juzgamiento, de entre todos los Vocales del Distrito Judicial, en forma rotativa y secreta, bajo responsabilidad.

f. Iniciado el Juicio, éste se sustanciará en audiencias privadas diarias y consecutivas hasta su conclusión dentro del término máximo de quince días naturales, en que emitirá la sentencia siguiendo las reglas del Libro Tercero del Código de Procedimientos Penales, en cuanto sea aplicable.

g. Si se concede Recurso de Nulidad, los autos serán remitidos al Fiscal Supremo en lo Penal, el mismo que deberá designar a un Fiscal Supremo Adjunto el que emitirá Dictamen en el plazo máximo de tres días, bajo responsabilidad.

Con el Dictamen Fiscal, los autos se remitirán al Presidente de la Corte Suprema quien designará a los miembros de la Sala Especializada que debe absolver el grado en el plazo máximo de quince días. El recurso de nulidad se resuelve con cuatro votos conformes.

h. En la tramitación de los procesos por terrorismo, no procede la Recusación contra los Magistrados intervinientes ni contra los Auxiliares de Justicia. (*)

(*) Inciso declarado inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 010-2002-AI-TC LIMA, publicado el 04-01-2003.

"i).- Podrá dictarse orden de comparecencia para el nuevo juzgamiento, en los casos en que la Corte Suprema declare la nulidad de la sentencia que absuelve al procesado." (*)

(*) Inciso agregado por el Artículo Unico de la Ley N° 26590, publicada el 18-04-96



CONCORDANCIAS: D.L. N° 25475, Arts. 1, 14, 15, 16, 18 y Tercera y Cuarta D.T.
D.L. N° 25659, Arts. 5, 6 y 7
D.L. N° 25660, Art. 1
D.L. N° 25708, Art. 1
D.L. N° 25744, Art. 2
D.S. N° 015-93-JUS, Arts. 2 y 4
D.S. N° 035-93-JUS, Art. 6

Artículo 14.- Ambientes especiales para la instrucción

La instrucción en los delitos de terrorismo se sustanciará en ambientes especialmente habilitados para tal efecto en los respectivos establecimientos penitenciarios, garantizándose el derecho de defensa de los procesados.

CONCORDANCIA: D.L. N° 25475, Art.13 y Segunda Disposición Transitoria

Artículo 15.- Reserva de identidad de los magistrados y otros

La identidad de los Magistrados y los miembros del Ministerio Público así como la de los Auxiliares de Justicia que intervienen en el juzgamiento de los delitos de terrorismo será **SECRETA**, para lo cual se adoptarán las disposiciones que garanticen dicha medida. Las resoluciones judiciales no llevarán firmas ni rúbricas de los Magistrados intervinientes, ni de los Auxiliares de Justicia. Para este efecto, se utilizarán códigos y claves que igualmente se mantendrán en secreto.

Los infractores de esta disposición serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de siete años más las accesorias de ley, por delito contra la función jurisdiccional.

Si el agente del delito a que se refiere el párrafo precedente es Magistrado o Auxiliar de Justicia y/o actúa con fines de lucro o por complicidad, la pena privativa de libertad será no menor de quince años más las accesorias de ley.

CONCORDANCIA: D.L. N° 25475, Arts. 13, 17 y Primera Disposición Transitoria

Artículo 16.- Ambientes especiales para el juicio

El Juicio se llevará a cabo en los respectivos establecimientos penitenciarios y en ambientes que reúnan las condiciones adecuadas para que los Magistrados, los miembros del Ministerio Público y Auxiliares de Justicia no puedan ser identificados visual o auditivamente por los procesados y abogados defensores.

CONCORDANCIA: D.L. N° 25475, Art.13

Artículo 17.- Competencia de los magistrados.

Para los efectos de lo dispuesto en el presente Decreto Ley, los Magistrados asumen competencia a nivel nacional para conocer del delito de terrorismo sin observar el lugar de la comisión del hecho delictuoso.



CONCORDANCIAS: D.L. N° 25475, Arts. 13 y 15
D.L. N° 25728, Art. 1
D.L. N° 25744, Art. 2

Artículo 18.- Limitación para abogados.

En los procesos por delito de terrorismo los abogados defensores no podrán patrocinar simultáneamente a más de un encausado, a nivel nacional. Están exceptuados de esta disposición los Abogados de Oficio. (*)

(*) Artículo derogado por Artículo 4 de la Ley N° 26248, publicada el 25-11-93

CONCORDANCIAS: D.L. N° 25475, Arts. 12 Inc. f, 13 y Tercera Disposición Transitoria

D.L. N° 25744, Art. 2
D.S. N° 015-93-JUS, Art. 18

Artículo 19.- Improcedencia de beneficios.

Los procesados o condenados por delitos de terrorismo, no podrán acogerse a ninguno de los beneficios que establecen el Código Penal y el Código de Ejecución Penal.

CONCORDANCIAS: D.L. N° 25744, Art. 2
D.L. N° 25916, Art. 1

Artículo 20.- Lugar de ejecución de penas y visitas.

Las penas privativas de libertad establecidas en el presente Decreto Ley se cumplirán, obligatoriamente, en un centro de reclusión de máxima seguridad, con aislamiento celular continuo durante el primer año de su detención y, luego (*) con trabajo obligatorio por el tiempo que dure su reclusión. En ningún caso, y bajo responsabilidad del Director del establecimiento, los sentenciados podrán compartir sus celdas unipersonales, régimen disciplinario que estará vigente hasta su excarcelación. (*)

(*) Frases declaradas inconstitucionales por la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 010-2002-AI-TC LIMA, publicado el 04-01-2003.

Los sentenciados por delito de terrorismo tendrán derecho a un régimen de visita semanal estrictamente circunscrito a sus familiares más cercanos. El Sector Justicia reglamentará el régimen de visita mediante Resolución Ministerial.

CONCORDANCIAS: D.L. N° 25744, Arts. 2 y 3
R.S. N° 114-92-JUS, Arts. 1, 2, 4, 6 y 7
D.S. N° 003-2001-JUS

Artículo 21.- Duración de la pena privativa de libertad.

Modifícase el Artículo 29 del Código Penal, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera:



"Artículo 29.- La pena privativa de libertad tendrá una duración mínima de dos días hasta cadena perpetua".

CONCORDANCIAS: D.L. N° 25428, Art. 1
D.L. N° 25475, Arts. 3 a 11

Artículo 22.- Disposición derogatoria.

Derógase el Capítulo II del Título XIV del Libro Segundo del Código Penal que comprende los Artículos 319 al 324 del acotado cuerpo de leyes así como la Ley N° 24700 modificada por la Ley N° 25031 y, modifícase en su caso todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto Ley.

Artículo 23.- Fecha de vigencia.

El presente Decreto Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Primera.- Códigos y claves.

Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 15 del presente Decreto Ley, los Presidentes de la Corte Suprema, Cortes Superiores, el Fiscal de la Nación y el Fiscal Decano del Distrito Judicial respectivo, serán responsables de la elaboración de las claves y códigos pertinentes así como de velar por el secreto de los mismos. Por razones de seguridad dichos códigos y claves deberán ser modificados periódicamente.

CONCORDANCIA: D.L. N° 25475, Art. 15

Segunda.- Remisión de causas a otros Distritos Judiciales.

En el juzgamiento de los delitos de terrorismo, los Presidentes de las Cortes Superiores de los Distritos Judiciales que cuenten con menos de tres Salas Especializadas, remitirán la causa al Distrito Judicial más próximo, el mismo que procederá de acuerdo con el inciso d) del Artículo 13 y siguientes del presente Decreto Ley.

CONCORDANCIA: D.L. N° 25475, Art. 13

Tercera.- Abogados de oficio.

En los Distritos Judiciales de Lima y Callao el Ministerio de Justicia proveerá los Abogados de Oficio que sean requeridos por el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú, quedando facultado para contratar a profesionales del Derecho con tal fin. En los demás Distritos Judiciales, las autoridades políticas dispondrán la contratación de los Abogados de Oficio.

CONCORDANCIA: D.L. N° 25475, Arts. 12, 13 y 18

Cuarta.- Coordinación entre organismos del Estado

El Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y Ministerio de Economía y Finanzas, efectuarán las coordinaciones necesarias y dictarán



las disposiciones pertinentes a efectos de la mejor aplicación y cumplimiento del presente Decreto Ley.

CONCORDANCIAS: D.L. N° 25475, Arts. 12 y 13
D.L. N° 25708, Arts. 3 y 4

Quinta.- Adecuación de casos.

Los casos que a la fecha de vigencia del presente Decreto Ley se encuentren en estado de investigación policial, Instrucción o Juicio, se adecuarán, en cuanto a su trámite, a lo previsto en el presente Decreto Ley.

CONCORDANCIAS: D.L. N° 25475, Arts. 12 y 13
D.S. N° 035-93-JUS, Art. 6

Sexta.- Mesa de Partes para terrorismo.

Los Presidentes de las Cortes Superiores de los diferentes Distritos Judiciales dispondrán la instalación de una Mesa de Partes única y exclusiva para casos de terrorismo, dotándola de la seguridad y el personal necesario con el objeto que los abogados defensores y Abogados de Oficio puedan revisar y estudiar los expedientes, así como recibir las informaciones que sean requeridas.

Séptima.- Incautación de bienes.

Los bienes muebles, inmuebles, dinero y otras especies que sean incautadas durante la investigación policial y judicial, que hayan sido utilizados para perpetrar la comisión de los delitos previstos en este Decreto Ley, serán puestos a disposición de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (DIRCOTE) para su cuidado y administración. Si se dictara sentencia condenatoria contra los propietarios encausados, consentida y ejecutoriada que sea ésta, los bienes incautados pasarán definitivamente a propiedad del Estado y serán afectados a los organismos públicos responsables de la defensa de la sociedad.

CONCORDANCIAS: D.L. N° 25744, Arts. 2 y 4
D.LEG. N° 926, 2da.Disp.Comp.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos noventidós.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Relaciones Exteriores

VICTOR MALCA VILLANUEVA
Ministro de Defensa



CARLOS BOLOÑA BEHR
Ministro de Economía y Finanzas

JUAN BRIONES DAVILA
Ministro del Interior

FERNANDO VEGA SANTA GADEA
Ministro de Justicia

VICTOR PAREDES GUERRA
Ministro de Salud

ABSALON VASQUEZ VILLANUEVA
Ministro de Agricultura

JORGE CAMET DICKMANN
Ministro de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración

JAIME YOSHIYAMA TANAKA
Ministro de Energía y Minas

AUGUSTO ANTONIOLI VASQUEZ
Ministro de Trabajo y Promoción Social

ALFREDO ROSS ANTEZANA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

JAIME SOBERO TAIRA
Ministro de Pesquería

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Lima, 05 de agosto de 1992

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Relaciones Exteriores

FERNANDO VEGA SANTA GADEA
Ministro de Justicia